



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SALA PLENA**

**MAGISTRADA PONENTE DRA. ALBA LUCÍA BECERRA AVELLA**

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veinte (2020)

**NATURALEZA : CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD**  
**AUTORIDAD : ALCALDESA MUNICIPAL DE RICAURTE**  
**RADICADO : 25000-23-15-000-2020-02399-00**  
**OBJETO DE CONTROL. : DECRETO No. 133 del 26 de junio de 2020, por el cual se prorroga la suspensión de la atención al público en la administración central del municipio y se dictan otras disposiciones.**

Se advierte que mediante auto del 6 de julio de 2020<sup>1</sup>, el Magistrado Dr. Oscar Armando Dimaté Cárdenas, ordenó remitir el presente asunto, para efectos de llevar a cabo el control inmediato de legalidad del Decreto No. 133 de 26 de junio de 2020 *“Por el cual se prorroga la suspensión de atención al público en la administración central del municipio y se dictan otras disposiciones”*, expedido por la Alcaldesa del Municipio de Ricaurte (Cundinamarca).

Así entonces, procede la suscrita Magistrada, a pronunciarse respecto del conocimiento del control inmediato de legalidad, establecido en el artículo 136 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respecto del mencionado del Decreto No. 133 del 26 de junio de 2020, proferido por la Alcaldesa municipal de Ricaurte (Cundinamarca).

### **I. ANTECEDENTES**

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud – OMS declaró el Coronavirus como una pandemia e instó a los Estados a tomar medidas preventivas para la mitigación del contagio. En razón de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual, declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y adoptó medidas para enfrentar la pandemia.

Mediante el Decreto No.637 del 6 de mayo de 2020, el Presidente de la República, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario.

A través el Decreto Nacional No. 636 del 6 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional, impartió instrucciones con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, y con el fin de preservar el mantenimiento decretó, entre otras disposiciones, el aislamiento preventivo obligatorio, desde las cero horas (00:00 a.m) del 11 de mayo de 2020 y hasta las cero horas (00:00 a.m) del 25 de mayo de 2020, y ordenó a los gobernadores y alcaldes que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de esta medida.

---

<sup>1</sup> Allegado al correo electrónico del despacho el 7 de julio de 2020.

## **Control Inmediato de Legalidad: 25000-23-15-000-2020-02399-00 2**

Posteriormente, con el Decreto Nacional No. 689 del 22 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional prorrogó la vigencia del Decreto 636 de 2020, hasta el 31 de mayo de 2020 y, en consecuencia, extendió las medidas establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 2020. A la postre, a través del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, nuevamente se prorrogó la medida de aislamiento obligatorio preventivo a partir de las cero horas del 1° de junio de 2020, hasta las cero horas del 1° de julio de 2020. Luego, se expidió el Decreto 878 del 25 de junio de 2020 que prorrogó la vigencia del anterior decreto y, con esto, se amplió la medida hasta las 12 de la noche del día 15 de julio de 2020. Seguidamente, se profirió el Decreto 990 del 9 julio de 2020, por medio del cual se amplió la medida de aislamiento desde las cero horas del día 16 de julio de 2020 hasta las cero horas del 1° de agosto de 2020.

A su turno, la Alcaldesa Municipal de Ricaurte (Cundinamarca), actuando en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, expidió el Decreto No. 133 de 2020, por medio del cual, prorrogó la suspensión de la atención presencial en todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Ricaurte desde el 1° de julio de 2020 hasta el 15 de julio de 2020 y, adicionalmente, autorizó a los funcionarios, contratistas y personal vinculado a la administración municipal, a desempeñar las labores propias de su cargo desde sus lugares de residencia.

En virtud de lo anterior, la Alcaldesa Municipal, remitió el referido Decreto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su respectivo control inmediato de legalidad, cuyo reparto, efectuado por la Secretaría General de esta Corporación, fue asignado al Magistrado Dr. Oscar Armando Dimaté Cárdenas, quien mediante auto del 6 de julio de 2020<sup>2</sup>, ordenó remitir el presente asunto a la suscrita Magistrada para su sustanciación y proyección.

Lo anterior, teniendo en cuenta que del contenido del citado decreto, observó que el mismo prorroga la suspensión de atención presencial en las dependencias de la Alcaldía Municipal de Ricaurte, adoptada por el Decreto 079 del 24 de marzo de 2020 que a su vez fue prorrogado por los Decretos Nos. 088 de 1° de abril de 2020 *“Por el cual se ordena la suspensión de términos de actuaciones administrativas competencia del Municipio de Ricaurte Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”*; 095 del 11 de abril de 2020 *“Por el cual se prorroga la suspensión de términos de las actuaciones administrativas de competencia del Municipio de Ricaurte y se prorroga la suspensión de atención al público en la administración central del municipio”*; 101 del 26 de abril de 2020 *“Por el cual se reanudan los términos de las actuaciones administrativas de competencia del Municipio de Ricaurte (Cundinamarca), se prorroga la suspensión de la atención al público en la administración central del municipio y se dictan otras disposiciones”*; 106 del 8 de mayo de 2020 *“Por el cual se prorroga la suspensión de atención al público en la administración central del municipio y se dictan otras disposiciones”*.

Y, por cuanto, el control inmediato de legalidad del Decreto 079 de 24 de marzo de 2020, por medio del cual se suspendió la atención presencial en todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Ricaurte (Cundinamarca) desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020, le correspondió a la suscrita magistrada, por reparto efectuado por la Secretaría General de esta Corporación.

En efecto, la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia de la suscrita magistrada, mediante proveído del veintitrés (23) de junio de dos mil veinte (2020), decidió sobre el Control Inmediato de Legalidad, respecto del Decreto N° 079 del 24 de marzo de 2020, mediante el cual se adoptan las disposiciones del Decreto Departamental N° 159 del 24 de marzo de 2020 *“por el cual se prohíbe en el Departamento de Cundinamarca el consumo de bebidas alcohólicas en espacios abiertos, espacio público y establecimientos de comercio y*

---

<sup>2</sup> Allegado al correo electrónico del despacho el 7 de julio de 2020.

### **Control Inmediato de Legalidad: 25000-23-15-000-2020-02399-00 3**

se dictan otras disposiciones” y se suspende la atención al público en la administración central del Municipio de Ricaurte (Cundinamarca), expedido por la Alcaldesa Municipal. En dicha oportunidad, se resolvió DECLARAR IMPROCEDENTE el CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD respecto del Decreto N° 079 del 24 de marzo de 2020, por cuanto se advirtió que no fue proferido en desarrollo de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, como consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19, mediante la expedición del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, emanado por el Presidente de la República, o con ocasión de los demás decretos legislativos suscritos por el Gobierno Nacional en torno a tal declaratoria, en tanto el fundamento principal obedeció al ejercicio de una función administrativa ordinaria de la Alcaldesa Municipal, en consideración a las atribuciones y competencias constitucionales y legales que le asisten como máxima autoridad de la entidad territorial, facultades o funciones administrativas ordinarias y no de una facultad extraordinaria que tiene como fin desarrollar decretos legislativos expedidos con base en los Estados de Excepción.

## **II. CONSIDERACIONES:**

El artículo 215 de la Constitución Política, autoriza al Presidente de la República, a declarar el Estado de Emergencia, cuando se presenten circunstancias distintas a las previstas en los artículos 212 y 213 *ibídem*, que perturben o amenacen perturbar, en forma grave e inminente, el orden económico, social, ecológico del País, o constituyan grave calamidad pública.

En virtud de lo anterior, el Congreso de la República, expidió la Ley 137 de 1994 “*Ley estatutaria de los Estados de Excepción*”, precisando en su artículo 20, lo siguiente:

*“Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.*”

*Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición”.*

En ese mismo sentido fue desarrollado el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, en el cual, frente al control inmediato de legalidad, se señaló:

**ARTÍCULO 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD.** *Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.*

*Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se*

## **Control Inmediato de Legalidad: 25000-23-15-000-2020-02399-00 4**

*efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento.*

De conformidad con lo anterior, se infiere que este medio de control inmediato de legalidad, solo es procedente para examinar los actos administrativos expedidos con ocasión del estado de excepción, que sean de contenido general, proferidos por las autoridades territoriales en ejercicio de funciones netamente administrativas **y que tenga como fin desarrollar los decretos legislativos**<sup>3</sup> que fueren dictados en relación con los estados de excepción.

Ahora bien, una vez revisado el contenido del Decreto No. 133 del 26 de junio de 2020, objeto del presente control de legalidad, se evidencia que el mismo, no fue proferido en desarrollo a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, como consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19, mediante la expedición del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, emanado por el Presidente de la República, o con fundamento en los demás Decretos Legislativos suscritos por el Gobierno Nacional en torno a tal declaratoria.

En efecto, entre las normas que fundamentan el referido acto administrativo, se advierte que contiene como sustento las atribuciones y facultades consagradas en el artículo 315 de la Constitución Política, además de las funciones otorgadas en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 551 de 2012 que faculta a los alcaldes en el marco de su autonomía dirigir la administración municipal y la prestación de los servicios a su cargo, por lo tanto, su adopción no requiere de la declaratoria del Estado de Excepción de que trata el artículo 215 de la Constitución Política y que fue decretado a nivel nacional a raíz de la grave e inminente situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país.

De manera que, en el presente asunto, la Alcaldesa Municipal de Ricaurte (Cundinamarca), si bien, decretó prorrogar la suspensión de la atención presencial en todas las dependencias de la Alcaldía Municipal, como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria que actualmente vive el país, tal acto administrativo informativo **fue expedido en ejercicio de una función administrativa ordinaria**, con fundamento en las atribuciones y competencias constitucionales y legales que le asisten como máxima autoridad de la entidad territorial, y no de una facultad extraordinaria atribuida con ocasión a la declaratoria del Estado de Excepción, ni de sus Decretos Legislativos, como ya se mencionó.

Por consiguiente, no resulta procedente en este caso, adelantar el control inmediato de legalidad del señalado acto administrativo, de acuerdo con lo establecido por los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, es importante aclarar, que ello, no comporta el carácter de cosa juzgada de la presente decisión, pues no se predicen los efectos procesales de dicha figura en cuanto a su inmutabilidad, vinculación y definición y en tal medida, es susceptible de control judicial ante esta Jurisdicción, conforme al medio de control procedente y en aplicación el procedimiento regido en la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

Así las cosas, al no cumplirse con los requisitos mínimos necesarios para iniciar el proceso de control automático de legalidad en los términos del numeral 3º del artículo 185 del C.P.A.C.A., no se avocara conocimiento en el asunto del epígrafe.

---

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 21 de junio de 1999, Radicado No. CA 023, C.P: Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 31 de marzo de 2020, Radicado No. 110010315000202000958000, C.P: Dr. Oswaldo Giraldo López.

**Control Inmediato de Legalidad: 25000-23-15-000-2020-02399-00 5**

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA**,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE** adelantar el **CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD** respecto del Decreto No. 133 del 26 de junio de 2020, expedido por la Alcaldesa Municipal de Ricaurte (Cundinamarca), por el cual se prorroga la suspensión de atención al público en la administración central del municipio desde el 1° de julio de 2020 hasta el 15 de julio de 2020 en todas las dependencias de la Alcaldía Municipal, de conformidad con lo expuesto en parte motiva de esta decisión.

**SEGUNDO:** La presente decisión, **no hace tránsito a cosa juzgada**, por lo tanto, contra el aludido acto administrativo general, procederán los medios de control pertinentes, en aplicación con el procedimiento regido en nuestra codificación procedimental y contenciosa administrativa y/o demás normas concordantes.

**TERCERO:** Notificar la presente decisión, a través del correo electrónico o el medio más expedito al Ministerio Público y a la Alcaldesa Municipal de Ricaurte (Cundinamarca).

**CUARTO:** Se ordena que por Secretaría de la Subsección "D" de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se comunique la presente decisión, en la sección "*Medidas COVID19*" de la página web de la Rama Judicial.

**QUINTO:** Toda comunicación deberá ser dirigida a través de los siguientes correos electrónicos:

1. [scs02sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co](mailto:scs02sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co)
2. [s02des09tadmincdm@notificacionesrj.gov.co](mailto:s02des09tadmincdm@notificacionesrj.gov.co)

**SEXTO:** Ejecutoriada esta decisión, archívese el expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**ALBA LUCÍA BECERRA AVELLA**  
Magistrada